

La Historia Económica de México y de Nicaragua (1877-1995)

PÉREZ-HURTADO, Kathya Carolina*†

Universidad Nacional Autónoma de México.

Recibido Enero 16, 2015; Aceptado Septiembre 12, 2015

Resumen

Ideales políticos y luchas internas construyeron lo que hoy comparten México y Nicaragua: un crecimiento sin desarrollo económico, desigualdad en la distribución de ingresos, una politización de la actividad social, y aunque a diferentes escalas, una inestabilidad económica y social latente. Se deben de conocer los antecedentes históricos, para entender tan complejos sistemas económicos, que necesitan estudios exhaustivos sobre sus diferentes sectores productivos y su base financiera. Solo así, existirá la garantía de construir un buen diseño estratégico, soportado por una real transformación del sector público y del sistema político, que confieran eficiencia y modernidad a las instituciones políticas, bajo el marco de un avance tecnológico sin precedentes.

Historia Económica de México, Historia Económica de Nicaragua, Hiperinflación, revoluciones latinoamericanas.

Abstract

Political ideals and internal struggles are similarities behind the reality of Mexico and Nicaragua: growth without development, inequalities in the distribution of wealth, a politicization of the social activities, and, although in different scales, an economic and social instability. One must know the historical background in order to understand the complex economic systems, which need exhaustive studies on to the productive and financial sectors. Only then will there be the guarantee that a good strategic design can be built, and which can be supported by a true transformation of the public sector and the political system, which confer efficiency and modernity to the public institutions, under the scheme of a tremendous technological advance.

Mexican Economic History, Nicaraguan Economic History, Hyperinflation, Latin-American revolutions.

Citación: PÉREZ-HURTADO, Kathya Carolina. La Historia Económica de México y de Nicaragua (1877-1995). Revista Investigaciones Sociales 2015, 1-1: 1-16

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: kathya.perezhurtado@gmail.com)

† Investigador contribuyendo como primer autor.

Introducción

Aproximadamente 1700 Km separan a dos países de legados y futuros distintos: México y Nicaragua. Uno es un país de poco más de 112 millones de habitantes (INEGI), y el centroamericano apenas llega a los 6 millones según la información revelada del censo poblacional del 2005 (INIDE). Muchas cosas parecieran indicar que estos países no tienen nada en común, excepto el idioma. Pero es sorprendente encontrar que sus historias se encuentran enlazadas, y que sus antecedentes económicos están concatenados hacia un presente que ambos comparten.

Ideales políticos y luchas internas construyeron lo que hoy los dos países comparten: un crecimiento sin desarrollo económico, desigualdad en la distribución de ingresos, una politización de la actividad social, y aunque a diferentes escalas, una inestabilidad económica y social latente. A continuación se hace un recuento de los acontecimientos históricos más relevantes que construyeron las bases de la estructura económica de México y Nicaragua, separándose en tres periodos: el primero, al que llamo *Transición*, comprende de 1877 a 1933 y abarca periodos en los que ambos países sufrieron cambios en sus estructura política y que tuvieron repercusiones claras en sus economías. El segundo periodo, al que nombro *En Búsqueda de la Estabilidad*, comprende el periodo de 1934 a 1970, época en la que las dos naciones buscaron estabilidad y gozaron de años dorados en su crecimiento y desarrollo económico. El tercer periodo, *el Declive*, comprendiendo desde 1970 a 1995, incluye momentos que arrebataron de ambos países la tranquilidad. Para México fue una tormentosa lucha por recuperar la estabilidad que poseía en años anteriores, y que tenía su foco en una hinchada deuda externa.

Para Nicaragua fue una lucha contra una dictadura que dejó una economía maltrecha y en estado de guerra, acechada por hiperinflación, fuga de capitales, embargos comerciales, entre otros. Finalmente, y en manera de conclusión, se hace un resumen del estado de ambas economías en la actualidad después de los procesos ocurridos desde 1995. ¿Qué paso con ambos países? ¿Ha funcionado el modelo económico promovido por economías desarrolladas a países en vías de desarrollo? ¿Nos sirve de algo estudiar la historia económica de los países para conocer y, posiblemente determinar, que puede ocurrir si se emplean ciertas políticas macroeconómicas?

Sabemos que ambas naciones siguieron las indicaciones de organismos multilaterales, y han sufrido consecuencias similares de dicho proceso, un debilitamiento de la economía interna, dependencia en otras economías y mayor polarización entre las clases sociales. A continuación se elabora en estos tres periodos y se busca vislumbrar la problemática, no solo mexicana y nicaragüense, sino también la latinoamericana que ha sufrido altos y bajos políticos y sociales, y que efectivamente han tenido repercusiones en las economías de los países hispanoamericanos. ¿Qué políticas económicas siguieron los países en estudio a través de los años? ¿Han llevado dichas políticas a un desarrollo económico auténtico? ¿Qué propuestas surgen para aliviar la problemática económica que sufren ambas naciones?

Finalmente, se incluyen datos acerca el PIB per cápita de ambas naciones desde 1960 y su evolución al 2009. También se hace el comparativo de los términos de intercambio, la deuda externa y la balanza comercial.

Transición (1877-1933)

México

Para México el crecimiento económico del periodo de Porfirio Díaz estuvo marcado por grandes altos y bajos, que no solo dejaron el desarrollo y la repartición equitativa de las riquezas dañadas, sino que también suscitaron a una revolución. Fue un periodo de gloria para los monopolios y los oligopolios, claramente uno de los factores que provocaron concentración de poder, limitando los alcances que tenía la visión Porfiriana de expansión económica.

Fueron incentivados en esta época los sectores industrial y minero. Gracias al ferrocarril, la explotación de recursos minerales fue clave para la exportación de estos bienes hacia Estados Unidos y Europa. Estos canales de transporte y comunicación eran capaces de unificar al país, y de prestarse para el avance cada vez más rápido de la demanda debido a la segunda revolución industrial que se suscitaba en esos años. Pero este modelo de crecimiento económico no fue tan favorable para el sector agrícola, que debido a la política de crecimiento hacia afuera provocó que los alimentos provenientes de sembradíos para el consumo interno fueran relegados debido a la creciente demanda externa de productos agrícolas. La exportación era más importante que la motivación para el crecimiento y desarrollo del sector interno. Este tipo de políticas, provenientes de otros países, influyeron de manera considerable en la toma de decisiones de subsidios y otros incentivos para el crecimiento de los distintos sectores.

Ejemplo de esta disparidad fue el caso del sector bancario, pues al contrario del avance que existía en el país, no concedían préstamos para financiar el proceso productivo de la nación, ni tampoco hizo crecer tanto a la economía vía la bolsa de valores. Fue un sector rezagado y desaprovechado, que de haber sido más grande, hubiera colapsado en la revolución.

La absorción de gastos gubernamentales destinados a la pacificación y reconstrucción del país, después del estallido de la revolución, fue un problema clave para el crecimiento económico, pues para 1911 este representaba un 25% del presupuesto (Tello, 150). Además, el bandidaje, robo y saqueo afectaron al sector minero, con reducciones de hasta un 53% en la producción anual de plata para 1914, y de oro en 67% para el mismo año (Tello, 161). De 1913 a 1916-1917 hubo significativas disminuciones en toda la actividad económica, excepto en el petróleo (Tello, 162).

Asimismo, uno de los problemas más graves fue el desorden monetario, con una circulación de dinero caótica. Esto se observa al pasar de billetes emitidos por bancos (julio de 1913 a agosto de 1914) al papel moneda constitucionalista (agosto de 1914 a junio de 1916) al papel moneda "infalsificable" (junio de 1916 a diciembre de 1916) (Tello, 162). Para fines de 1913 la circulación de monedas de plata había desaparecido, lo que afectó la liquidez de los bancos, y el incremento sustancial de la circulación de billetes provocó una rápida depreciación en valor oro durante febrero, marzo y abril de 1914, haciéndolo constantemente por los años siguientes (Tello, 192). Ya no existía confianza en la inversión ni el financiamiento previo a 1925 y la agricultura fue uno de los sectores más afectados, mientras que los sectores industrial, manufacturero y textil se adormecieron por la guerra. La única rama que no decayó fue la producción petrolera, incentivada por la demanda mundial (Tello, 202).

La lucha por reconocimiento fue ardua para varios presidentes, y “no obstante que el gobierno de Estados Unidos dio el reconocimiento a Carranza como presidente constitucional en 1917, las tensiones no disminuyeron...los planes para someter a Carranza iban desde usar la necesidad de dinero y granos como palanca para llegar a transacciones, financiar una rebelión...ocupar militarmente las zonas petroleras, hasta crear un *protectorado financiero* con la intervención de la aduanas y el control de presupuesto público por agentes financieros estadounidenses. De hecho esta política, junto con la intervención militar, se había aplicado en otros países de América Latina como Nicaragua, Honduras, Republica Dominicana y Haití” (Tello, 212).

Para 1920, Álvaro Obregón encontró las finanzas públicas en estado desastroso, y con una disponibilidad de crédito externo e interno al gobierno casi nulo (Tello, 258). En 1923 Alberto Pani, como Secretario de Hacienda, manejó las finanzas públicas con una política de austeridad, recortando salarios y personal del sector público, y diversificando las fuentes de ingresos (Tello, 259). Era claro que la reconstrucción del país rebasaba en gran medida la capacidad financiera del Estado, que aún mantenía confrontaciones con diversos grupos sociales. El gasto de gobierno central como proporción del PIB se elevó con cada administración desde inicio del siglo. Al término del porfiriato era de 3.9%, con Calles fue de 5.9%, con Cárdenas fue de 7.4%, y con Alemán fue de 8.9% (Tello, 262). Debido a la escasez de financiamiento externo, el ingreso público se integró casi en su totalidad con recursos propios. La inversión pública fue modesta con Obregón, y se aplicó en su gran mayoría a la reparación de los ferrocarriles.

La centralización e intervención estatal consistió en crear las bases institucionales del nuevo gobierno, que tenía como pilar la creación del banco central.

Es hasta 1925 que se inicia la preparación del Banco de México, mismo que tenía como fin la emisión de billetes, regulación de la moneda, financiar al Estado, ser banco de los bancos, y dar servicios restringidos al público. Proyectos como este se realizaron, aún cuando este periodo se caracterizó por estar rodeado de ideales distintos, y presiones internacionales, que solamente abonaron a la problemática nacional. México no se había repuesto totalmente de la revolución, y así se adentró hacia una nueva era.

Nicaragua

Después de 30 años de paz tras gobiernos conservadores, llegó a la silla presidencial nicaragüense el General José Santos Zelaya (1893-1909). Siguiendo las tendencias expansionistas y modernizadoras que vivían otros países, el general Zelaya instauró la educación como gratuita y obligatoria, promoviendo la construcción de escuelas. Conjuntamente introdujo modernas leyes, códigos y reglamentos que fortalecieron el sistema judicial, como el Habeas Corpus y el matrimonio civil. Unificó a gran parte del país con la construcción del ferrocarril y carreteras, y la modernización del sistema de correo y telégrafo. Impulsó al transporte marítimo, con las nuevas tendencias de navegación a vapor, realizando mejoras importantes en los puertos de San Juan del Sur y San Juan del Norte (Romero, 92).

Pero Zelaya no gozó de una aceptación total por parte de la población. Entre las causas se puede mencionar su decreto para la confiscación de los bienes de la Iglesia. Además tensas relaciones caracterizaron su gestión con Estados Unidos, y llegaron a tal punto de desacuerdo que suscitaron la primera intervención norteamericana en suelo nicaragüense (Romero, 95).

Zelaya se negaba a negociar una posible vía interoceánica con las condiciones impuestas por Estados Unidos, ni tampoco firmar préstamos con banqueros de Nueva York. Al observar el interés que tenían los ingleses en una construcción de canal interoceánico, contrató un préstamo por 1,250,000 libras esterlinas para impulsar el ferrocarril al Atlántico y mejorar así las finanzas del país (Romero, 98). Pero no descartó las ofertas que le había hecho a Japón y Alemania.

Conflictos en las diferentes cúpulas políticas provocaron la contrarrevolución de octubre de 1909. Todo indicó que este movimiento fue financiado por los Estados Unidos, cuando explícitamente colaboraron los dueños de las minas “La Luz and Los Angeles Mining Company”, mismas que habían sido confiscadas por el gobierno por incumplimiento de las cláusulas del contrato de concesión. Curiosamente el Secretario de Estado de Estados Unidos, Philander Chase Knox tenía a su cargo la asesoría legal de la familia Fletcher, ex concesionaria de las minas mencionadas (Romero, 101).

Todo estalló en 1907 cuando buques de guerra estadounidenses ocuparon los principales puertos de este país centroamericano, y en 1909 el gobierno de Zelaya capturó a mercenarios norteamericanos, los enjuició y los mandó ejecutar (Romero, 102). Esto provocó la orden de intervención en suelo nicaragüense. El Secretario de Estados Unidos, P.C. Knox, entregó una nota que declaraba el fin del respaldo al gobierno de Zelaya. Esta nota, conocida después como la *Nota Knox*, fue rechazada por toda América Latina por ser violatoria de la soberanía de los pueblos (Romero, 103).

Lamentablemente, la intervención duró hasta 1925, y una segunda intervención surgió en 1926 por temor de otra insurrección.

El caudillo Augusto Cesar Sandino viajó a México para solicitar ayuda y recibió armas y voluntarios, agudizando las ya tensas relaciones entre este país y Estados Unidos (Tello, 254). Las fuerzas de Sandino crecieron en contra de la invasión norteamericana, y tras la victoria electoral del liberal Juan Bautista Sacasa en 1933 las tropas estadounidenses se retiraron, pues tenían una crisis nacional que era insostenible y debían resolver sus problemas internos primero (Romero, 104).

La economía nicaragüense de ese tiempo se dedicaba a tres grandes sectores: agricultura, manufactura y comercio, siendo el primero el principal motor de crecimiento. Las tendencias mundiales habían dirigido al sector agricultor a satisfacer la demanda externa e interna. La externa era capital intensiva, dirigida a la exportación, mientras que la interna era atrasada, tradicional y producía bienes básicos de asalariados (Gibson, 34). Desde el siglo XIX hasta la Gran Depresión de 1929, este país se dedicó a la exportación de añil, cacao y sobre todo café. Cuando se derrumbó la demanda de bienes primarios en los años treinta, las exportaciones se desplazaron hacia el oro (Gibson, 34).

Pero la economía debía reinventarse tras los disturbios causados por las intervenciones norteamericanas. En 1937, con el apoyo de los Estados Unidos, llegó al poder Anastasio Somoza García, quien llevó a Nicaragua y a su economía hacia otros horizontes.

En Búsqueda de la Estabilidad (1934-1970)

México

La recuperación de la economía mexicana se inició en 1932, y lo hizo de manera rápida y a paso fuerte. Para 1935, el primer año de gobierno de Lázaro Cárdenas, el PIB había superado el nivel de 1928, un año antes de la crisis estadounidense (Tello, 141).

Y es que si la economía mexicana cayó en crisis en esos años, fue por su importante apertura hacia el exterior. Políticas como el libre movimiento de mercancías, de flujos financieros, la convertibilidad de la moneda, provocaron fragilidad en el sistema. El desequilibrio interno, provocado principalmente por un descenso en la producción, causó desempleo, y por el desequilibrio externo, la economía mexicana debía reinventarse, y lo hizo, preservando la tradición ortodoxa: frenando el gasto público. La gestión de Cárdenas se caracterizó por ser prudente y ortodoxa con respecto a las políticas de finanzas públicas, tanto así que nunca provocó un déficit de más de 1% del PIB (Tello, 223).

Por su parte, el plan sexenal sentó las bases para un verdadero desarrollo nacional, y se considera como la primera etapa de un régimen progresivo de economía dirigida. Se resolvió atender la cuestión agraria, incentivando la investigación en este sector, y los trabajos de investigación sobre el cultivo de maíz y del trigo. De 1935 a 1942, el ritmo de crecimiento del producto agrícola fue de 5.2% anuales (Tello, 192). En conjunto, las políticas adoptadas en el sexenio, dieron pie al desarrollo económico y social, mucho mejor que al administrativo y de defensa.

Con Cárdenas surge una economía mixta, que dio como frutos un desarrollo de la economía del país a partir de 1940, caracterizándolo la nacionalización del sistema ferroviario y petrolero. La economía mexicana creció a paso agigantado de 1940 a 1954. Mientras que durante los años de la guerra la demanda externa explica, en buena medida, el crecimiento de la economía, a partir de 1946 la demanda interna se convirtió en el motor de la economía mexicana. Además, el gasto público se orientó de manera creciente al fomento económico.

Dentro de la actividad industrial, el desarrollo de las manufactureras se concentró, durante 1940 a 1954, en las de tipo tradicional: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, prendas de vestir, calzado, papel, imprenta, madera. A partir de 1954 este sector se desplazó a otras manufacturas como el hule, químicos, minerales no metálicos, siderurgia, construcción de maquinarias, equipo de transporte, entre otros (Cárdenas, 95).

En 1954, bajo el mandato de Adolfo Ruiz Cortines, México sufrió una devaluación del peso frente al dólar estadounidense, buscando restringir las importaciones y fomentar las exportaciones, promoviendo así el turismo y la inversión privada. Fue a partir de ese año que México gozó de estabilidad en los precios internos, creciendo alrededor de 3.5% al año, y de mejores PIB por persona, creciendo a un ritmo anual superior a 3.4% en términos reales (Tello, 360). Los efectos de la devaluación fueron claros: la economía creció más del 10% en términos reales (Cárdenas, 97). Conjuntamente, el gobierno estimuló la producción, estableciendo nuevos precios de garantía en el maíz, trigo, frijol, arroz y sorgo. En términos reales los precios aumentaron por algunos años, pero después dejaron de hacerlo. La actividad agrícola tuvo un crecimiento acelerado durante los años que van de 1940 y 1965. A partir de este último año y hasta 1970, su ritmo de crecimiento disminuye considerablemente. Su participación en el PIB disminuyó de un 7% a la mitad para finales del periodo en estudio (Tello, 397).

El desarrollo nacional en los gobiernos de López Mateo y Díaz Ordaz descansó en la estabilidad de precios internos, del tipo de cambio y la libre convertibilidad en la moneda, en el sistema de sustitución de importaciones, y en el financiamiento no inflacionario del gasto público.

El Estado buscó orientar el ahorro que la economía nacional generaba hacia las diferentes actividades productivas, sentándolo en la orientación selectiva del crédito, utilizando instrumentos como el encaje legal, los fondos de fomento y las instituciones nacionales de crédito (Tello, 408).

Asimismo, el financiamiento del gasto público durante los años 1958 a 1970 no fue fuerte, con un déficit global para finales de este período del 4.7% del PIB (Tello, 421). El financiamiento externo fue creciendo durante esos años: el saldo de la deuda pública externa se quintuplicó en términos monetarios (de 5.5% del PIB a 9.2% del PIB), y su servicio pasó de representar 13.4% de las exportaciones a 26.3% a finales del período (Tello, 422). Se incrementó el gasto administrativo de 25% a 31% del total del gasto público, como resultado del aumento del pago de intereses de la deuda pública que, de representar 2.9% del total del gasto en 1959, pasó a 9.4% en 1970 (Tello, 423). Para complementar los recursos faltantes del gobierno federal se utilizó el encaje legal y el sobregiro.

Se incentivó claramente un desarrollo acompañado de certidumbre y garantías, no solo para el empresario, sino para los trabajadores. Pero un déficit fiscal supuestamente sano, estuvo basado en una creciente deuda externa, cuyos efectos no eran visibles en esos momentos. El desarrollo estabilizador tuvo oportunidades perdidas: la actividad agropecuaria, una reforma fiscal eficiente y efectiva, y la problemática de los salarios. Se deseaba un desarrollo estable, y México gozó de *la época dorada* para su economía.

Nicaragua

Las exportaciones de oro constituyeron, en 1940, un 60% del total de las exportaciones (Gibson, 35).

El sector agrícola había trasladado sus cultivos a dos principales bienes: el café y el plátano. Pero la demanda internacional solicitaba algodón, y observando ésta necesidad, los gobiernos de Somoza García y Somoza Debayle (hijo de Somoza García) se enfocaron en realizar la transición de una economía aislada, atrasada y estancada, a una capitalista más dinámica, plenamente integrada al mercado mundial, y además, con exportaciones diversificadas, que incluían azúcar, carne, mariscos y tabaco (Gibson 35).

Durante los años cincuenta la economía se expandió a una tasa media anual de 5.8% y para los años sesenta se elevó a 8.7% (Gibson, 41). Y es que una pauta fluctuante de la inversión contribuyó a los movimientos del PIB per cápita.

Para ello, el gobierno asumió un papel claramente activo en la promoción del sector agroindustrial, acompañado por la política de sustitución de importaciones. Como consecuencia, se agudizó la sensibilidad de precios por parte de los productores, y la tenencia de la tierra se concentró rápidamente. Muy similar al caso mexicano en el porfiriato y años posteriores, “la aristocracia [nicaragüense] terrateniente compraba las tierras de los campesinos y a veces los desalojaba por la fuerza, con la asistencia de la Guardia Nacional y la policía local” (Gibson, 36).

Lamentablemente, la visión de crecimiento hacia afuera había provocado que “el consumo de alimentos entre la mayoría de la población, de ingresos mínimos, estuviera muy por debajo de los índices medios de nutrición sana y suficiente. Aproximadamente la mitad de los niños padecían desnutrición, mal que era grave en un 15% de los casos” (Barracough, 54).

Además, se obligaba a los campesinos a proveer mano de obra para la cosecha durante la temporada de mayor actividad, y así mantener una política de “alimentos baratos”, destinada también a mantener bajos los salarios urbanos. La deterioración de los términos de intercambio evolucionó en contra de la agricultura nacional, y las políticas de tasa de cambio favorables y aranceles alentaron la reasignación de la tierra para que sirviera a los mercados internacionales antes que al mercado interno.

Existía una clara conexión entre el gasto del sector público y las crisis de la balanza de pagos que trataban de evitar mediante un cuidadoso control de la oferta monetaria y la cuenta pública. Pero el sistema era impotente para resistir los choques externos, y ante la ausencia de préstamos externos, el sector manufacturero formal se contrajo por la escasez de insumos importados, provocando la expansión del sector informal. El régimen de Somoza hizo escasos esfuerzos para usar la política monetaria y fiscal de manera explícita como instrumentos para estabilizar la economía. Sus políticas eran liberales, los mercados de capital y de productos se mantenían abiertos y libres, la moneda era convertible a una tasa que balanceaba los pagos, y el gasto público estaba limitado por la recaudación (Gibson, 44).

Por el contrario, el sector externo recibió una total atención por parte del régimen autoritario de los Somoza. En aras de aumentar la competitividad, se devaluó la moneda de 1 a 5 córdobas por dólar (1929), y se implantó un sistema de controles de cambios y tasas de cambio múltiples que duró hasta 1959, cuando se fijó una tasa estable de 7 córdobas por dólar (Gibson, 46). Fue en 1963 cuando se declaró una libre convertibilidad de la moneda, y para antes del terremoto de 1972, el Banco Central de Nicaragua se aseguraba de que el córdoba no se sobrevaluara.

Pero, como se mencionó anteriormente, el gobierno no realizó ningún esfuerzo de unificación para promover el desarrollo económico balanceado, y ante las tensiones sociales, se vio obligado a introducir proyectos de desarrollo rural (Gibson, 47). Desde 1950 hasta principios de los años setenta, Nicaragua pudo sostener tasas de crecimiento agregado que se encontraban entre las más altas de América Latina, pero su éxito se basaba en la concentración del ingreso a manos de una minoría de agroexportadores. Aunque si llegó a una relativa estabilidad en la economía del país, existía descontento social, lo que provocó una revolución en 1979, que además arrastraba el enojo por una lenta reconstrucción del país después del devastador terremoto ocurrido en 1972. Pero la cura resultó peor que la enfermedad, y la economía del país buscó sobrevivir ante las adversidades de la guerra.

Declive (1970-1995)

México

Bajo el mandato de Luis Echeverría Álvarez, en 1970 México era un país privilegiado: poseía un sólido crecimiento económico, estable en materia monetaria y crediticia, evitando trastornos políticos y sociales tras siete lustros de paz posrevolucionaria. Pero esa imagen del país al final de la década de 1970 correspondía sólo a una parte de la realidad. La producción de bienes y servicios básicos, necesarios para la marcha de la economía estaba estancada, los desempleados se acumulaban rápidamente y la satisfacción de las necesidades de servicios educativos, médicos, sanitarios y de vivienda tenía un retraso de años. El desarrollo del transporte por carretera no había arrancado de la marginación a vastas áreas rurales del país y el estancamiento de los ferrocarriles se convertía en un cuello de botella para las actividades ya establecidas.

Lo más grave de toda esta problemática era la no autosuficiencia en materia de producción de alimentos, con un estancamiento del crecimiento del mercado interno.

La política económica estuvo casi exclusivamente orientada de modo artificial, con una forzosa estabilidad tributaria y de precios relativos claves. Esto resultaba insostenible a largo plazo. El gasto público descansaba débilmente sobre el encaje legal que producían los depósitos que captaba el sistema bancario para financiarlo y no en los ingresos propios del Estado. Se llevaron a cabo políticas contractivas, y provocaron un descenso, apenas similar a la tasa de incremento de la población (Tello, 475). Se disminuyó el gasto del sector público en términos reales, y en particular el gasto de inversión se contrajo drásticamente un 22% en términos reales (Tello, 475).

A finales de agosto de 1976 la economía nacional estaba en un estancamiento inflacionario, y era difícil sostener el tipo de cambio, y el 31 de ese mes, se anunció la modificación de la paridad del peso respecto al dólar estadounidense, y es aquí cuando terminan 22 años de estabilidad cambiaria en México (Tello, 523). Junto con los incrementos en los precios, el público perdía crecientemente confianza en el sistema de intermediación financiera. En octubre de 1976, el Banco de México informó que ya no intervendría para sostener la paridad de 19.90 pesos por dólar, lo que confundió al público, y causó una segunda devaluación de la moneda, que se fue a más de 26.5 pesos por dólar (Tello, 524).

El crecimiento acelerado de la deuda externa, llevó a la contratación de nueva deuda para cubrir los vencimientos de capital e intereses, generándose un círculo vicioso.

Con un alza en las tasas de interés, reducción de los plazos de los créditos contratados, fuga de capitales sin precedente, caídas en los precios de las mercancías que el país exportaba y la reducción del precio del petróleo se resuelve devaluar el peso frente al dólar estadounidense, en casi 40%, en febrero de 1982. A unos cuantos días, se dio una nueva devaluación de la moneda y se acordó un aumento salarial de 30% para apenas hacerle frente a la pérdida del poder adquisitivo (Tello, 575). Para abril de ese año, se estableció un segundo programa de ajuste, con mayor énfasis en el control de las finanzas públicas, pero tampoco funcionó.

La dependencia excesiva de la economía mexicana en el petróleo, el deterioro de las finanzas públicas y la deteriorada balanza de pagos fueron los argumentos que utilizó la banca extranjera para justificar la fuga de capitales que distorsionaba cualquier esfuerzo de programación financiera. Para entonces el país ya no contaba con divisas. Los fondos depositados por la banca comercial en el banco central para cumplir con los requisitos del encaje legal eran usados para la compra de bonos del gobierno. Pero tras una serie de acontecimientos, en septiembre de 1982 se nacionaliza la banca de México y se establece el control de cambios, y de inmediato se reestructura el sistema bancario.

Surge en ese mismo año la concepción del pensamiento neoliberal, basada en reformas del Consenso de Washington: liberalización del comercio exterior, del sistema financiero y de la inversión extranjera, es decir una orientación de la economía hacia los mercados externos, realizando además, privatizaciones de empresas públicas, regulación fiscal, reducción del gasto público, garantizando un marco legislativo e institucional para garantizar los derechos de propiedad, entre otros.

Con la promesa de mejorar la competitividad y estimular el libre acceso a los recursos de capital y tecnológicos, esta corriente fue atractiva para las economías de la región latinoamericana, incluyendo México. Pero fue una desilusión mejor conocida como la década perdida. Con un PIB por persona menor que varios países latinoamericanos y asiáticos, la familia mexicana en esos años tenía un ingreso anual de 8,400 dólares, mientras la de Corea obtenía el doble (Tello, 627).

En términos macroeconómicos, el sexenio 1983-1988 fue desastroso. Con reducciones al PIB por persona de 2.1% anual en términos reales, aumentos en los precios al consumidor, un tipo de cambio que pasó de 57 pesos por dólar en promedio (1982) a 2 mil 284 pesos en 1988, y una concentración más alta del ingreso, reflejado con un coeficiente de Gini de 0.549 en 1989 (Tello, 639). El gobierno se apoyó y promovió con todo tipo de estímulos a las casas de bolsa, en detrimento de la banca nacionalizada, a tal grado que se llegó a hablar de surgimiento de una “banca paralela” que competía con la del Estado.

La economía mexicana a finales de 1987 era frágil y frustrante, bajo el mandato de Miguel de la Madrid. Con una historia de estancamiento económico y una contracción significativa en el poder de compra de los salarios, el país sufría de una crisis interna dolorosa. Indicadores como la inflación crecía a tasas anualizadas de 461.4%, la deuda nacional llegó a representar 94.8% del PIB, esto a pesar de haber transferido como pago más de 53 000 millones de dólares en los cinco años anteriores (Cárdenas, 153). Para estabilizar a la economía se buscó reducir el peso de la deuda a través de un programa económico heterodoxo con fundamentos ortodoxos, eliminando así el elemento inercial de la inflación en poco tiempo. Además se profundizó el programa de cambio estructural, el de la apertura comercial y la reducción del tamaño del sector público.

Bajo este contexto, continua la labor presidencial Carlos Salinas de Gortari. La respuesta a los signos positivos del Plan Concertado para la Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE), que logró disminuir la inflación de 1989 a 19.7% fue muy positiva por parte de los inversionistas privados. En 1989 el PIB creció 3.3%, cifra superior al crecimiento de la población, logrando disminuir el déficit financiero del sector público de 12.5% del PIB a solo 5.6%, provocado principalmente por la reducción del pago de intereses de 23.5% en términos reales, como consecuencia de la reducción de las tasas nominales de interés, así como a 13.4% menos de gastos programables del sector público y a un aumento pequeño de los ingresos fiscales de 1.7% en términos reales (Cárdenas, 161). El anuncio de la reprivatización de la banca nacionalizada en mayo de 1990, y la decisión del país de negociar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, terminaron por convencer a los inversionistas nacionales y extranjeros de que las medidas para contener la inflación, así como los diversos cambios estructurales que se estaban dando en el área de comercio exterior, reprivatizaciones, desregulación, y otros, eran permanentes. La entrada de fondos no se hizo esperar.

Para 1991 la economía comenzó a mostrar signos de cierto debilitamiento, que entonces no era claro porque ocurría, y algunos analistas lo relacionaron como problemas de tipo cíclico en el ahorro y la inversión, con una contracción del crédito o con cierta recesión en la economía internacional, además de pérdida de competitividad. En definitiva se llegaron a niveles de estancamiento en 1993. La economía estaba frente a la “enfermedad holandesa”. Existía una presión al alza de los precios de bienes no comerciables en forma distinta que los precios de los bienes comerciables, una apreciación del tipo de cambio.

Las empresas veían como aumentaban sus costos, pero no podían hacer nada con los precios, pues si lo hacían, perdía mercado. La sobrevaluación del tipo de cambio también afectó el mercado de las empresas, pues los consumidores preferían bienes importados, que eran más baratos que los nacionales, debido a que el dólar era más barato.

El ancla nominal del tipo de cambio empezó a agotarse hacia 1992, y se ajustó para una nueva etapa. Se observó que la competencia externa, fruto de la apertura al exterior, debilitó la estructura productiva del país, generando cierre de empresas y desempleo. Se creó un grado de vulnerabilidad alarmante. Se redujo el desequilibrio externo mediante una política restrictiva, confiando en que los flujos externos de capitales continuarían indefinidamente alentados por la próxima firma del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Se necesitaba hacer algo rápido.

En 1993 se dio una discusión, no muy abierta, en los altos niveles de decisión del país sobre si se debía seguir persiguiendo el objetivo de bajar la inflación a niveles internacionales, o relajar el tipo de cambio para disminuir el déficit en cuenta corriente, aunque ello llevara a una inflación mayor. Otra alternativa era aceptar que la inflación regresara a niveles de alrededor de 20% al depreciar el tipo de cambio y disminuir el déficit comercial. El riesgo era claro, pánico generalizado y la pérdida de la credibilidad en el gobierno y en su política económica como consecuencia de la depreciación más rápida del peso.

Para entonces, la inflación estaba en menos de 10%, y resultaba poco atractivo ceder entonces. Las autoridades tomaron la decisión de disminuir la inflación a alrededor de 6% en 1994.

El peso se depreció alrededor de 8% entre febrero y marzo de 1994, pero después del asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, a fines de ese mes, la fuerte salida de reservas del Banco de México, de casi 11 000 millones de dólares, hizo que la depreciación se detuviera (Cárdenas, 185). Una emisión de tesobonos por parte de las autoridades para contrarrestar parcialmente la caída de reservas escondió la verdadera presión sobre el mercado cambiario, que reflejaba fuga de capitales y deuda externa disfrazada, y fue una manera de darle la vuelta al techo de endeudamiento externo establecido cada año por el propio Congreso de la Unión.

Las presiones en el tipo de cambio, junto con la política monetaria de expandir el crédito interno y en medio de ataques especulativos al peso, en parte causados por sucesos políticos, obligó a la devaluación abrupta del tipo de cambio apenas a las tres semanas de haber entrado en nuevo gobierno Ernesto Zedillo. Esta devaluación llegó a más de 100% en términos del peso, muy por encima de la sobrevaluación estimada en aproximadamente 20 a 25% (Cárdenas, 187). Esto inició un caos económico y financiero que repercutió en todo el país e internacionalmente. Todo México estaba endeudado.

Nicaragua

A principios de los años setenta, la población rural nicaragüense sufría de una alimentación deficiente, y de una tasa de analfabetismo elevada. Solo 20% de la población rural tenía acceso a los servicios de salud, y la tasa de mortalidad por enfermedades contagiosas se encontraba entre las más altas de América Latina (Gibson, 49).

La imposibilidad de compartir los frutos de la rápida expansión de la producción durante el periodo del crecimiento impulsado por las exportaciones, explica en buena parte el hecho de que un movimiento estudiantil militante haya podido encender grandes segmentos de la sociedad nicaragüense. Luego este movimiento sería conocido como el de los sandinistas, en honor a Augusto Cesar Sandino.

Tensiones políticas y sociales, y un devastador terremoto en 1972, acrecentó el descontento de los diferentes movimientos civiles. La revolución estalló un 19 de Julio de 1979. Para derrocar a Anastasio Somoza Debayle se incurrieron en ingresos sacrificados, destrucción y daño directo. Los esfuerzos de recuperación se vieron truncados por una lucha interna, y se le dedicó prácticamente el 50% del presupuesto gubernamental (Gibson, 53). El país se vio obligado a subsistir cada año con una cantidad menor de bienes importados. El déficit comercial acumulado en el periodo 1980-1984 ascendió a más de 2000 millones de dólares, una suma aproximadamente equivalente al PIB de 1985 (Gibson, 54). Había heredado una deuda de 1600 millones de dólares de la familia Somoza, pero se había incrementado a más de 4000 millones de dólares en 1985. No tenía acceso al Banco Mundial, al BID o a la ayuda bilateral de Estados Unidos. En general, los déficit fiscales no se financiaban con los impuestos; el gobierno recurría a la imprenta y a la creación de crédito para apoyar sus iniciativas sociales. La combinación de controles de precios y de importaciones de bienes de consumos contuvo la tasa de inflación, pero ésta aceleró en 1984 a 60%, y para 1985 se encontraba cerca de 320% (Gibson, 57).

El gobierno sandinista, bajo el caudillista Daniel Ortega Saavedra había emprendido una expansión del sector público en términos de la propiedad y el control de la inversión.

Pero prácticamente solo los tres primeros meses de 1980 pueden considerarse como poseedores de algo cercano al equilibrio fiscal. De hecho, el crecimiento de la inversión es uno de los factores que diferencia a Nicaragua del resto de los países centroamericanos. Mientras en los primeros años ochenta los demás países experimentaban una regresión de la inversión en concordancia con la recesión económica mundial, Nicaragua mantuvo elevados índices de acumulación, siendo éste importante en el sector agrícola (Barraclough, 63). Ahora, si bien uno de los objetivos de la política sandinista era la regularización del sector agrícola, conduciendo a la sustitución de las agro-exportaciones por los cultivos agrícolas internos, la tierra fue utilizada deficientemente debido en gran parte a la escasez de mano de obra. El gobierno procuró subsidios para algunos bienes de consumo básico, pero el consumidor común no era siempre el beneficiado. La política de contención salarial, que buscaba reducir las presiones inflacionarias, produjo resultados contraproducentes. Se alentó la emigración de trabajadores del campo a la ciudad, provocando la escasez de trabajadores para las cosechas (Pizarro, 271). Los controles cambiarios implicaron también que los trabajadores extranjeros ya no pudieran convertir sus salarios de córdobas a dólares. La monetización excesiva de la economía incremento la renta económica de las escasas divisas. La situación era insostenible.

Desde 1985 se entra a una economía de supervivencia. Prácticamente la guerra civil tuvo un costo humano alto: destrucción de infraestructura básica, como centros sanitarios, escuelas, entre otros. El país sufría un caos, que incluía para 1986 una inflación del 747% (Barraclough, 72). Fijar precios de garantía para los productores como un mecanismo compensatorio no bastaba para estimular la producción destinada a la exportación.

Creció el contrabando en virtud de las diferencias enormes entre los precios internos y los de los países vecinos. Proliferó el mercado negro de dólares, el comercio especulativo, la expansión del sector informal y otros desajustes. Esto se agravó con el embargo comercial impuesto por Estados Unidos desde 1985 (Romero, 105).

Ante presiones del exterior, el gobierno sandinista cede a elecciones democráticas, en las que resulta electa Violeta Barrios de Chamorro, quien tendría la tarea de reconstruir al país de la guerra y los estragos económicos. La producción estaba deteriorada, la deuda externa tenía un monto de US\$8,064 millones de dólares, mientras que los intereses moratorios capitalizados ascendían a US\$1,851 millones, o sea una relación per cápita de US\$2,697 (BCN). El déficit corriente en la balanza de pagos, persistía a niveles superiores de los US\$500 millones, y el volumen de exportaciones de bienes y servicios, era similar al del año de 1966, en un contexto de pérdida del poder de compra de las exportaciones del país (BCN). El producto interno bruto per cápita a inicios de 1990 era similar al registrado en 1945, US\$487 dólares constantes de 1980 (Avendaño, 1994).

Se estabilizó la moneda, eliminando la hiperinflación, se reingresó al país en los circuitos comerciales y financieros occidentales. Pero a pesar de los significativos cortes en el gasto público y la restricción financiera, derivados de la aplicación del programa de estabilización, persistieron la insuficiencia del ahorro interno, la creciente brecha comercial, el déficit fiscal y el desempleo abierto y un alto subempleo (Banco Mundial, 1993). Los problemas en la balanza de pagos llevaron a la necesidad de un ajuste fiscal permanente de sesgo recesivo y de poca eficacia para sostener la estabilidad de precios.

Más aún, dado el enorme servicio devengado de la deuda externa, el flujo de capital no fue suficiente para compensar totalmente la brecha de pagos corrientes, lo que originó que la deuda creciera por el aumento de la mora hasta 1993.

Por otro lado, la desregularización de los mercados financieros y la liberación comercial acelerada, no apoyaron el proceso de estabilización, dificultando encontrar una senda de crecimiento con una inserción en el mercado mundial coherente con una estrategia de desarrollo nacional. La liberación financiera, en un contexto de sobrevaluación y fijación monopolista de varios precios claves, contribuyeron al alza de las tasas de interés, al drenaje de los depósitos de ahorro hacia la fuga de capitales y priorizando la especulación financiera sobre la inversión productiva. El repunte en la actividad industrial de ron, cervezas, bebidas gaseosas, las aceiteras, y las cigarreras, se basan más en la obtención de privilegios fiscales como del sostenimiento de una protección comercial selectiva muy discrecional (Romero, 107).

En 1993, el Gobierno empezó a utilizar un esquema de deslizamiento cambiario, que fue respondido con una dolarización significativa del sistema de precios, para operar sobre valores considerados estables por el público (Avendaño, 1994). En este sistema dolarizado, el riesgo que implican las inversiones productivas, provoca que el ahorro financiero solamente se atesore sin tener aplicaciones productivas. Todo esto redundó en una situación de estancamiento económico entre 1991 y 1993, seguida de un débil e insuficiente crecimiento entre 1994 a 1996. Pese a que se produjo el hecho positivo de salir de una situación de declinación persistente de la economía, a una situación estacionaria, el crecimiento entre 1994 y 1996 no era sostenible.

La administración tenía el reto de vincular el crecimiento económico con mayores oportunidades para todas las personas a fin de incidir efectivamente sobre los niveles de pobreza. Bajo nuevas directrices políticas, surge en el poder presidencial Arnoldo Alemán, quien se enfocó en la inversión en infraestructura y carreteras, básicamente continuando con el modelo de reconstrucción y llamamiento a los sectores externos a invertir en mano de obra favorable, bajos costos de producción e instalación de transnacionales, maquilas y empresas mineras. Todo en aras de incentivar la inversión extranjera directa y la competitividad.

¿Qué sucedió después?

Después de 1995, ambos países experimentaron una reinención, una unificación a la corriente globalizadora que vivía la comunidad internacional. Ambas naciones habían sufrido ya revoluciones, inestabilidad, inflaciones sorprendentemente altas y crecimientos mediocres. Se veía al modelo neoliberal como la receta mágica para salir de ese estancamiento. Se quería realizar una rehabilitación y reactivación de la economía, a niveles lo suficientemente significativos como para absorber a buena parte de la población desempleada. El objetivo fundamental era lograr una estrategia eficaz de combate a la pobreza, manteniendo los equilibrios macroeconómicos básicos.

El marco de políticas debía ser coherente, buscando mejorar la posición competitiva en la atracción de la inversión extranjera y en la regionalización abierta por los Tratados de Libre Comercio, tanto el NAFTA y como el CAFTA. La garantía debía caer en un buen diseño estratégico, soportado por una real transformación del sector público y del sistema político, que confieran eficiencia y modernidad a las instituciones políticas.

Tanto México como Nicaragua siguen en esa búsqueda. Crisis financieras internacionales no han contribuido a que se cumpla esta meta, y esto debido a su dependencia en las otras economías. Ambos países están ligados de manera contraproducente a la globalización. Las políticas del Consenso de Washington son recetas formuladas por economías desarrolladas sobre como debe abrirse una economía hacia la globalización. Pero economías en desarrollo, como la mexicana y nicaragüense, no funcionan de esa manera. Son economías complejas, que necesitan estudios exhaustivos sobre sus diferentes sectores productivos y su base financiera.

La politización de la toma de decisiones macroeconómicas ha llevado a la satisfacción local de necesidades que brindan privilegios a sectores elites, marginando aún más a los sectores pobres. Interesantemente, ambos países regresaron a modelos políticos que estuvieron bajo escrutinio y observación nacional e internacional por acusaciones de corrupción, mal manejo de las arcas nacionales, entre otros, al PRI con Enrique Peña Nieto, electo en 2012, y Daniel Ortega Saavedra, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en 2007, y quien continua tras el poder presidencial nicaragüense. Se necesita de una reinención, no un seguimiento a ciegas de lo que imponen otras instituciones y gobiernos que muchas veces desconocen los antecedentes de las políticas que quieren aplicar en economías que poseen complicadas redes de comunicación y fragmentaciones en su sistema.

Anexos

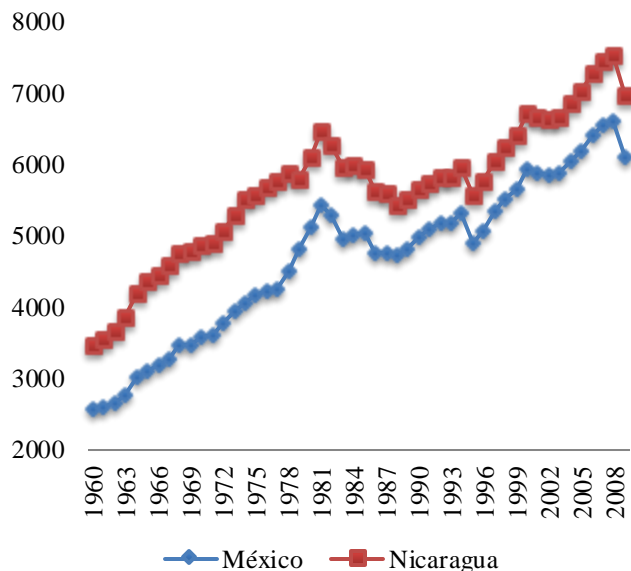
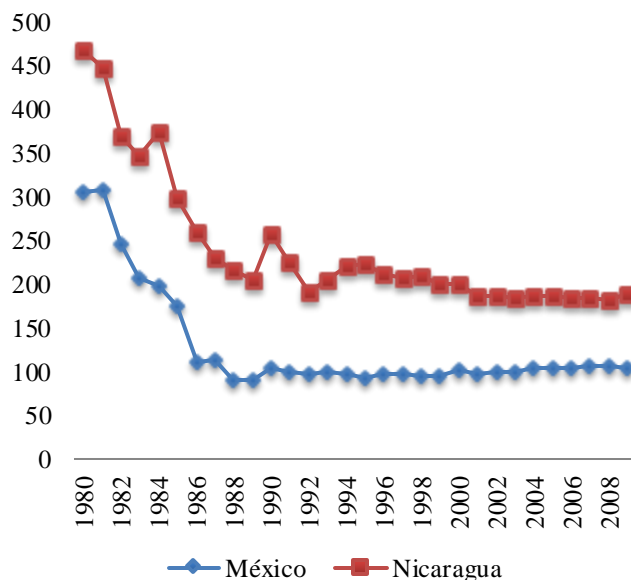
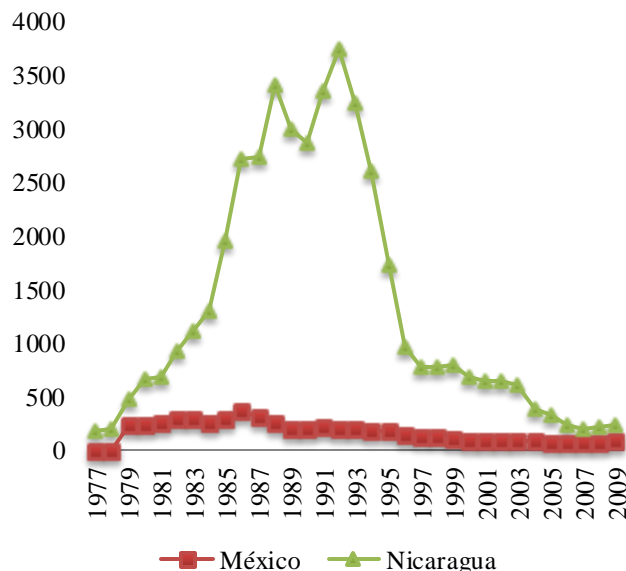


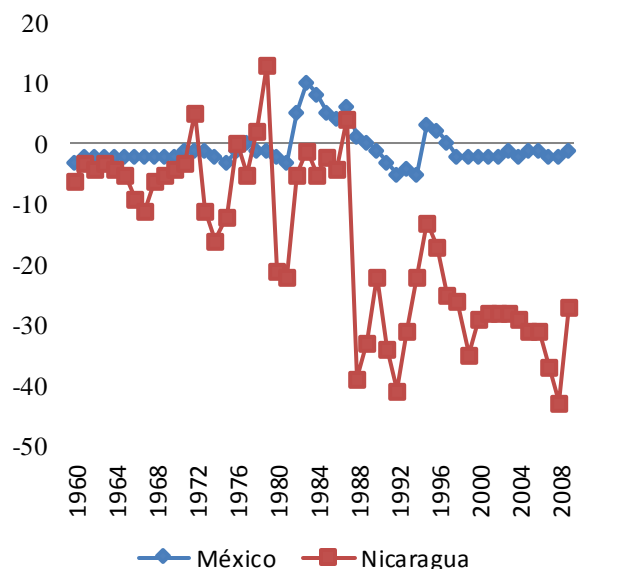
Gráfico 1 Producto Interno Bruto per Cápita México y Nicaragua, 1960-2009.



Gráfica 2 Términos de intercambio (NBTT), México y Nicaragua 1980-2009



Gráfica 3 Deuda Externa como porcentaje de las exportaciones, servicios e ingreso de México y Nicaragua, 1977-2009



Gráfica 4 Balanza Exterior de Bienes y Servicios de México y Nicaragua, 1960-2009

Referencias

Avendaño, Nestor. (1994). *La economía de Nicaragua. El año 2000 y las posibilidades de crecimiento*. Nicaragua: Colección Ensayos Nitlapán/CRIES.

BCN. *Banco Central Nicaragüense: Principales Indicadores Económicos, 1960-2000*. Recuperado el 3 de marzo de 2011 de <http://www.bcn.gob.ni>

Banco Mundial. (1993). *Nicaragua. Escenarios de crecimiento en una perspectiva de recursos externos decreciente*. Recuperado el 3 de marzo de 2011 de <http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=6732&entidad=Textos&html=1>

Barracough, Solon. (1988). *Nicaragua: Desarrollo y Supervivencia*. Madrid: Lepala.

Cárdenas, Enrique. (1996). *La política económica en México, 1950-1994*. México: FCE, COLMEX.

Gibson, Bill. (1987). *Una Panorámica estructural de la economía nicaragüense. La Economía Política de la Nicaragua Revolucionaria*. Comp. Spalding, Rose. México: FCE.

Pizarro, Roberto. (1987). *La nueva política económica: un reajuste necesario. La Economía Política de la Nicaragua Revolucionaria*. Comp. Spalding, Rose. México: FCE.

Romero, Germán. (2003). *Historia de Nicaragua*. Nicaragua: Hispamer.

Tello, Carlos. (2007). *De 1954 a 1970: desarrollo estabilizador. Estado y Desarrollo Económico: México 1920-2006*. México: UNAM, Facultad de Economía.

World Bank. World Databank. *World Economic Indicators, 2011*. Recuperado el 3 de marzo de 2011 de <http://databank.worldbank.org/ddp/home>